

LA GUERRA COLONIAL Y LA CRISIS DEL 98

El año **1898**, como el de 1812, es una de esas pocas fechas cargadas de significación plena en la historia de España. Quizá la crisis política de la Restauración pueda explicarse sin tener en cuenta la derrota del 98, pero siempre será evidente el hecho de que, en 1898, la posición internacional de España y la misma estructura territorial del Estado español, experimenta una radical transformación.

La política internacional de España en el siglo XIX viene condicionada por su debilidad económica y diplomática para hacer frente a una estructura territorial compleja: una metrópoli peninsular, y un conjunto de archipiélagos dispersos por todo el mundo: las Baleares y las Canarias; las plazas de soberanía en el norte de África; las islas del golfo de Guinea; Cuba y Puerto Rico en las Antillas; el inmenso archipiélago de las Filipinas y los tres archipiélagos – Carolinas, Marianas, Palaos- del Océano Pacífico. Un conjunto cuya defensa era poco menos que imposible en unos momentos de lucha feroz por los mercados y por el dominio de las rutas, de carrera frenética hacia un reparto del mundo en beneficio de las grandes potencias, de redistribución colonial entre las antiguas potencias coloniales “enfermas”, “menores” y los nuevos estados abanderados de la segunda revolución industrial. El 98 español constituye el ejemplo perfecto de esta redistribución a favor de un gigante de la época, los Estados Unidos.

En efecto, el imperialismo estadounidense estaba respaldado por una pujante economía que requería nuevos mercados en donde colocar los excedentes de producción y de capital. Este despegue económico lo había experimentado Estados Unidos al terminar la Guerra de Secesión (1861-1865). La expansión territorial, necesaria para solventar el incremento demográfico parejo a dicho desarrollo económico, fue primero interior, y cuando se consumó la “conquista del Oeste”, llegaron las acciones imperialistas en el exterior.

Ideológicamente el imperialismo estadounidense se apoyaba en diversas teorías. Su antecedente más inmediato era la *Doctrina Monroe* (“*América para los americanos*”) formulada en 1823, que generó en 1895 el *Colario Olney*, por el que ningún país europeo podía intervenir en América sin consultar a Washington. El *navalismo*, doctrina del almirante norteamericano Alfred T. Mahan, que concebía el poderío naval como el único capaz de proporcionar a un Estado la supremacía mundial, también apareció en los noventa. Así como la revitalización de la doctrina racial del *Destino Manifiesto*, surgida en 1845, que defendía la superioridad de la raza anglosajona y su misión de “anglosajonizar” a la Humanidad. Añádase, también, que el Derecho Internacional en el siglo XIX contemplaba la intervención de los “Estados civilizados” en aquellos “atrasados”.

Con todos estos presupuestos, EEUU llegó a entablar una guerra con México (1846-1848), con la que consiguió anexionarse Nuevo México, Alta California y Texas. Y, finalmente, a fundamentar su intervencionismo en América Latina mediante la “*diplomacia del dólar*”. A la altura de 1890, los círculos económicos y nacionalistas norteamericanos son los primeros en reclamar al gobierno estadounidense nuevos territorios. Las áreas de expansión que se acuerdan son el Pacífico y el Caribe, fijándose la atención especialmente en la isla de Cuba. Intereses económicos y estratégicos le inducían a ello: por un lado, la isla era un apetecible mercado para los excedentes comerciales y de capital; por otro, la anexión se concebía como indispensable para la integridad de la Unión. El único escollo que había que salvar era la presencia española en la zona, una presencia “anacrónica” y, merced a la política de recogimiento practicada por los gobiernos de la Restauración, carente de cualquier apoyo.

No obstante lo dicho, sería simplificar demasiado reducir nuestra exposición al enfrentamiento con los Estados Unidos, ya que el problema cubano viene desde tiempo atrás.

La Restauración heredó, junto con la guerra carlista, otra guerra en Cuba, iniciada en octubre de 1868 y que sería conocida como “Guerra de los Diez Años” o “guerra larga”. En efecto, tras la abdicación de Isabel II, un grupo de hacendados dirigidos por Carlos Manuel Céspedes, proclaman la independencia cubana el 10 de octubre (“*Grito de Yara*”). Este conflicto

no finalizó hasta la Paz de Zanjón, acordada en 1878, ya en la Restauración. Por una parte, se trató de una guerra de carácter colonial entre Cuba y la metrópoli y, por otra, de un conflicto civil interno entre los criollos cubanos y los españoles residentes en la isla. Las razones de la insurrección cubana son complejas y obedecen tanto a causas de carácter económico como de índole política e ideológica:

- ✓ La economía cubana había logrado un importante desarrollo, gracias a la masiva incorporación de mano de obra esclava y a la especialización en el cultivo de la caña de azúcar, que llegó a representar en 1870 el 42% de la producción mundial. Pero el gobierno de Cuba, ejercido por los militares, era autoritario y excluía a la burguesía criolla progresivamente enriquecida.
- ✓ A todo ello es preciso sumar la creciente dependencia de la economía cubana del mercado de los Estados Unidos, que absorbía gran parte de la producción azucarera, lo que propició una progresiva injerencia estadounidense sobre la isla.
- ✓ Las razones políticas están bien resumidas en el manifiesto de Céspedes de 1868: exigencia de participación de los cubanos en el gobierno de la isla, denuncia de la opresión económica padecida por los cubanos y necesidad de abolir el régimen esclavista. Los insurrectos cubanos rechazaban su condición de colonia.

Los diferentes gobiernos del Sexenio trataron de solucionar este conflicto por la vía de las reformas, pero fracasada ésta, sólo quedaba el enfrentamiento bélico, que se desarrolló sobre todo en la zona oriental de Cuba, en donde el ejército regular español se tuvo que enfrentar a unas guerrillas que gozaban del apoyo de los campesinos y de importantes grupos de la burguesía cubana, así como de los Estados Unidos, que a partir de 1873 hizo llegar armas a los insurgentes. Por si fuera poco, España no podía dedicar de lleno sus energías al problema cubano debido a la insurrección carlista. Esto explica la larga duración de una guerra que fue una verdadera sangría para el Estado, dadas las elevadas pérdidas humanas (130.000 hombres) y materiales que supuso.

La paz de Zanjón puso fin a la guerra, pero sólo aplazó el problema cubano. La paz prometía unas nuevas condiciones políticas y administrativas que proporcionarían una mayor capacidad de autogobierno a la isla, el fin de la esclavitud y una amnistía. Sin embargo, la vaguedad de los términos del acuerdo no contentó ni a los partidarios de España, ni a los independentistas, representados por Antonio Maceo. La situación empeoró con el incumplimiento del gobierno español a la hora de aplicar las reformas prometidas. Debido a ello, se produjo un nuevo levantamiento contra las autoridades españolas, que dio lugar a la llamada "Guerra Chiquita" (1879), aunque debido a la falta de apoyo entre la población cubana, fue fácilmente reprimida.

A comienzos de los años noventa el panorama general va a hacer que empeore la situación. Por un lado, se configuró una clase intelectual autóctona que defendía el separatismo, representada por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, creado en 1892. Por otra parte, el proteccionismo económico iba a afectar negativamente a los intereses cubanos, pues quedaba cortado el comercio con Estados Unidos, con lo que se acercaban las partes perjudicadas.

La gravedad de la situación era percibida en la metrópoli y de ahí que en el gobierno liberal, con Maura de ministro de Ultramar, se optara decididamente por la solución autonomista, tan temida por la impresión de debilidad que podía dar frente a los norteamericanos. El hecho es que en junio de 1893 Maura presentó su proyecto para la consecución de autonomía en Cuba. La reacción contraria fue tal que al año siguiente dimitió el ministro y se cerró esa vía de solución.

Como era de esperar, la guerra volvió a hacer acto de presencia, comenzando el 24 de febrero de 1895 con el "Grito de Baire" y la proclamación de la República de Cuba la fase definitiva, en la que se convirtieron en protagonistas los cabecillas Máximo Gómez, Calixto García, Antonio Maceo y, el que pronto sería "mártir" del movimiento, José Martí.

La solución militar se buscó en el general que ya había solucionado la papeleta en otra ocasión anterior: Martínez Campos. Pero esta vez, a pesar de los refuerzos enviados, no resultó tan eficaz. No había nada que negociar, sino vencer con las armas. La persona adecuada no era él y pidió a Cánovas que fuera Weyler el que le sustituyera. Éste llegó a principios del 96 y, dada la superioridad numérica y de medios que poseían sus tropas, pudo aislar los núcleos rebeldes y acabar sistemáticamente con su resistencia. La política de mano dura aplicada fue dando sus frutos y a mediados del año siguiente sólo en la zona oriental, que favorecía más las maniobras de los rebeldes, encontraban serias dificultades las tropas españolas.

Hubo un claro interés por acabar pronto con la guerra, ya que el cambio de presidente norteamericano tendría lugar el año 1897. Hasta ese momento era el demócrata Cleveland el que ocupaba el poder, lo cual suponía que no se iba a producir una intromisión en los asuntos cubanos. El temor se hizo realidad y fue elegido el republicano McKinley, personalmente decidido partidario de la paz, pero con poca fortaleza para hacer frente a los intereses y a las personas de tendencia belicista, que predominaban en su partido. En definitiva, desde el punto de vista militar no se logró plenamente el objetivo de asegurar una situación de paz.

Paralelamente, el gobierno de Cánovas intentó desarrollar una ofensiva diplomática entre las potencias europeas, para lograr un apoyo frente a la amenaza de la intervención norteamericana. El llamamiento no tuvo efecto positivo alguno, aunque sí que Estados Unidos aprovechó para declarar que considerarían una ofensa grave cualquier tipo de injerencia europea en el litigio.

Cuando estaban en marcha estas líneas de actuación se produjo un acontecimiento fundamental para el futuro: el 8 de agosto de 1897 Cánovas fue asesinado. Esto iba a precipitar todo. Sagasta tomó el poder y sustituyó a Weyler, tan denostado por los americanos, por el general Blanco, hombre débil y que sólo consiguió que se perdiera rápidamente la ventaja que se había tomado en el terreno militar.

El nuevo gobierno puso en marcha la tercera solución: la concesión de autonomía. En efecto, antes de concluir el año se promulgó una nueva Constitución para Cuba, en la que se declaraba a la isla como un Estado autónomo dentro de la Corona española, se concedía a sus habitantes la igualdad de derechos con los peninsulares y se aprobaba la creación de una cámara de representantes y un gobierno propios. Gracias a tales reformas se hizo posible que el 1 de enero de 1898 tomara posesión el nuevo gobierno cubano, que presidió Gálvez. Esto no supuso, de manera inmediata, el fin de los desórdenes, pero había ciertas esperanzas de mejorar. De hecho, ante la perspectiva de que esta vía fuera buena para acabar con la guerra, los Estados Unidos actuaron para evitar el buen fin de tal iniciativa. El cómo lo hicieron es de sobra conocido por todos:

El 25 de enero de 1898 quedó fondeado en La Habana el crucero Maine, trasladado allí para, según decían las autoridades, proteger los intereses americanos en la isla. En la noche del 15 de febrero el barco quedó destruido a consecuencia de una explosión, que ocasionó la muerte a más de 250 hombres. La impresión fue enorme, sobre todo por las previsibles consecuencias que pudieran tener los acontecimientos. La verdad es que, en efecto, resultó decisivo el incidente, tanto por lo que se refiere a la agitación popular estadounidense como al argumento de peso que tuvieron en sus manos los enemigos de España.

Aunque parece demostrado que la explosión se debió a causas internas, poco importó. La prensa sensacionalista norteamericana acusó a España del hundimiento y caldeó el ambiente para hacer inevitable la guerra.

Los intentos españoles de hallar una solución diplomática se multiplicaron. Ya el 8 de febrero, ante la presencia de la escuadra, se acudió a las grandes potencias europeas. Después, el 25 de marzo y una vez conocido el informe sobre el Maine, hubo otro intento para encontrar aliados. Por último, el 31 de marzo se renovaron las gestiones, dos días después de que los americanos exigieran la inmediata pacificación de la isla, aunque no se logró nada.

Por su parte, McKinley reiteró el planteamiento de venta de la isla, al mismo tiempo que endurecía su postura amenazante. En febrero envió a su secretario particular para mantener una entrevista personal con la Regente y declarar la disyuntiva final: o España vendía inmediatamente la isla o los Estados Unidos intervendrían militarmente. Ofreció 300 millones de

dólares como precio. María Cristina, como era de prever, no aceptó la imposición. Tras este fracaso, el embajador entregó el 17 de marzo el ultimátum, en el que se insistía en la consabida oferta, que días después fue públicamente rechazada.

Los trámites siguieron, pero no había duda de que terminarían en guerra. El 11 de abril el presidente McKinley pidió al Congreso permiso para intervenir militarmente en Cuba, que fue rápidamente concedido. Pocos días después se exigía al gobierno español la renuncia al gobierno sobre la isla y la retirada de todas las fuerzas militares. La Regente leía un mensaje de la Corona en el que se aceptaba el conflicto y el Congreso de los EEUU declaraba formalmente la guerra a España.

La guerra comenzó a tener su desenlace en Filipinas, la otra gran colonia española donde también se había producido un estallido independentista en 1896, aunque a finales de 1897, tras el pacto de Biacnabató, la situación parecía controlada. No obstante, el estallido de las hostilidades con los Estados Unidos significó el traslado de la escuadra norteamericana desde Hong Kong a Manila, a cuya bahía llegaba el 30 de abril, para impedir la posible ayuda a Cuba. Poco después, el 1 de mayo, se enfrentaron en Cavite las dos armadas, concluyendo la batalla siete horas después con la destrucción de la fuerza defensora. Hasta el 14 de agosto, sin embargo, no se produjo la rendición de Manila. La fuerza combinada de los rebeldes filipinos y de los norteamericanos superó a las tropas españolas, que capitularon y se entregaron a los vencedores, en tanto se firmaba el tratado de París.

En cuanto a Cuba, la batalla naval no se planteó hasta la llegada a Santiago, en mayo, de la escuadra al mando del almirante Cervera. La flota, bloqueada desde su llegada por la estadounidense y presionada por la opinión pública y la actitud gubernamental que consideraba que una rendición tendría como consecuencia la caída del régimen, acabó por salir el 3 de julio para hacer frente a los acorazados enemigos. La desproporción de fuerzas fue notable: en cuatro horas acabó la pelea en el mar, con la destrucción de nuestra armada. Santiago capituló; la situación de superioridad era tan evidente que, a pesar de que el ejército español mantenía el dominio de la capital, era claro que, con la derrota en Filipinas, sólo cabía la salida de la rendición. El 18 de julio se pedía al gobierno francés que mediara ante Estados Unidos, y en el mes de agosto se firmó el protocolo de Washington, hasta la llegada de un acuerdo definitivo.

El destino puertorriqueño estuvo también estrechamente ligado al de Cuba. Declarada la guerra hispano-americana, a los tres meses las tropas estadounidenses desembarcaron en el sur de Puerto Rico. El camino hacia San Juan, la capital, resultó más penoso de lo que pudo presagiar el fácil comienzo de las hostilidades. De todos modos, ante la clara superioridad de las tropas invasoras, en agosto se firmó el armisticio. En él los vencedores exigían que, como precio a los gastos, se les cediera Puerto Rico de forma incondicional. En la posterior paz de París fue ratificado este extremo.

El 10 de diciembre de 1898 se firmó el *Tratado de París*, un dictado de exigencias norteamericanas, que España tuvo que acatar sin rechistar, de cuya ratificación fueron excluidos los cubanos, puertorriqueños y filipinos. España, además de perder Cuba, tuvo que ceder a Estados Unidos Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam de las Marianas, en concepto de indemnización de guerra. Las pocas posesiones asiáticas que le quedaban, terminó vendiéndolas a Alemania en 1899: las Palaos, las Carolinas y las Marianas. De esta debilidad se aprovechó Francia en el contencioso que con ella mantenía el torno a los límites del Sáhara y Guinea Ecuatorial (tratado de 1900). En definitiva, mientras las potencias europeas, lanzadas a la carrera colonial, se repartían el mundo, España quedaba no sólo marginada del reparto, sino que perdía sus posesiones, y se acentuaban en el interior contradictorios sentimientos de pesimismo y regeneración que marcarían todo el reinado de Alfonso XIII y contribuirían a la profunda crisis del sistema de la Restauración.

Por su parte, los Estados Unidos mostraron a las claras su verdadera intención. Además de anexionarse impunemente Puerto Rico y Filipinas, respecto de Cuba, además de devastada, arruinada y hambrienta, la guerra supuso un cambio de amo. EEUU no se anexionó la isla, pero la convirtió en su protectorado, ocupándola militarmente hasta el 20 de mayo de 1902, bajo el

pretexto de proporcionar las condiciones necesarias para su andadura política en solitario. En 1901, la "Enmienda Platt" le autorizaba a intervenir en la isla para defenderla cuando se estimase necesario, cláusula que estuvo vigente hasta 1934. Y por si fuera poco, esta subordinación quedó reforzada en 1903 por un tratado comercial de "reciprocidad", que en realidad lo que hacía era aumentar la dependencia económica de Cuba con respecto a Estados Unidos. La isla, en definitiva, obtenía la independencia política aunque mediatizada por la injerencia de Estados Unidos.

El "*desastre*" supuso un auténtico aldabonazo en la conciencia de los españoles, y arrastró una serie de consecuencias importantes, que hacen del fin de siglo un momento crucial de nuestra historia.

Están, en primer lugar, las pérdidas humanas. Se calcula que las guerras de 1895-1898 costaron en conjunto unos 120.000 muertos, de los cuales la mitad fueron soldados españoles. La mayoría de las muertes se debieron a enfermedades infecciosas, que dejaron además graves secuelas en los supervivientes. Si al principio los daños no repercutían demasiado en una opinión pública adormecida, poco a poco comenzaron las protestas y se fue extendiendo la amargura entre las familias pobres cuyos hijos habían sido enviados a pelear en las colonias por no poder pagar las 2.000 pesetas que excluían de las quintas. Los perjuicios psicológicos y morales fueron también importantes: los soldados retornaban heridos, pésimamente atendidos, muriendo de hambre, mutilados o tarados por la guerra. A ello se añadía la desmoralización de un país consciente de su propia debilidad y de lo inútil del sacrificio.

Las pérdidas materiales, si bien no fueron excesivas en la metrópoli, salvo la fuerte subida de los precios de los alimentos en 1898, sí fueron graves a largo plazo. La derrota supuso la pérdida de los ingresos procedentes de las colonias, así como de los mercados privilegiados que éstas suponían y de las mercancías que, como el azúcar, el cacao o el café, deberían comprarse en el futuro a precios internacionales.

La crisis política resultó inevitable, y derivó de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para evitar primero, controlar después y, finalmente, vencer en tres guerras que se les escaparon por completo de las manos. El desgaste fue de ambos partidos, pero afectó esencialmente al Liberal y a Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar la derrota. Consecuencia inmediata fue la pérdida de autoridad y el final de la carrera de la primera generación de dirigentes, que debe ceder el terreno a los nuevos líderes, como Francisco Silvela y Antonio Maura, en el Partido Conservador, o Segismundo Moret, Eugenio Montero Ríos y José Canalejas, en el bando liberal.

Pero quizás fue más grave el desprestigio militar, derivado de la dureza de la derrota, y a pesar de la capacidad demostrada aisladamente por algunos generales y el valor de las tropas. Era evidente que el Ejército, pese a las impopulares quintas, a los recursos materiales y a los sacrificios humanos, no había estado preparado para un conflicto como el ocurrido. Aunque en último extremo la responsabilidad era más política que militar, el Ejército salía considerablemente dañado en su imagen, lo que traerá graves consecuencias en el siglo XX.

En el clima de la derrota surgieron una serie de críticas tanto hacia el funcionamiento del sistema político como a la propia mentalidad derrotista y conformista del país. Sorprendió especialmente a los dirigentes políticos y a los intelectuales la pasividad con que la opinión pública reaccionó a la pérdida del Imperio colonial, pasividad sólo alterada por el dolor y las protestas por las pérdidas humanas. Ni la guerra cubana ni el *desastre* provocaron en el país un movimiento de exaltación nacionalista. De hecho, los políticos justificaban el sacrificio de la flota en la batallas que llevaban a una derrota segura en la idea de salvar la dignidad patria y en evitar al país una humillación nacional, y el resultado sorprendente era que la población española no reaccionaba como se esperaba: se aceptó la derrota con resignación y con fatalidad. La convulsión se produjo entre los políticos y los intelectuales, no entre las clases populares.

Entre todas las críticas y análisis de aquellos meses destacan las de los llamados **regeneracionistas**. Entre ellos destacaron Ricardo Macías Picabea, Damián Isern y, sobre

todo, Joaquín Costa, cuyas ideas se reflejaron en una serie de conferencias en el Ateneo de Madrid, y que se publicaron con el título de *Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de España*. La tesis regeneracionista se basaba en la constatación del aislamiento del cuerpo electoral del país, de la corrupción de los partidos políticos y del atraso económico y social que España presentaba respecto a los países europeos más avanzados. Tales críticas no eran nuevas: ya en años anteriores las habían realizado hombres como Valentí Almirall o Lucas Mallada. Los regeneracionistas presentaban programas basados en una reorganización política, la limpieza del sistema electoral, la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma educativa, la acción orientada hacia la ayuda social, las obras públicas y, en definitiva, una actuación encaminada al bien común y no en beneficio de los intereses políticos de la oligarquía.

Algunos de los nuevos políticos que en el contexto del desastre se pusieron al frente de los partidos, como Silvela, Maura, Canalejas o el general Polavieja, adoptaron muchas de las ideas regeneracionistas e intentaron aplicarlas. En marzo de 1899 la presión política desembocó en un voto de censura hacia Sagasta, causado por la derrota. Francisco Silvela, nuevo líder conservador, formó un gobierno que presentó un programa regeneracionista, con el propósito de moralizar la vida política y emprender un ambicioso plan de reforma económica y de inversiones. Pero el gobierno entró pronto en crisis. Los enfrentamientos internos entre el Ministro de Hacienda, Fernández Villaverde, que quería recortar el gasto a toda costa y elevar los impuestos directos, y el resto de los ministros, que se negaban al recorte precisamente porque querían emprender programas de reforma, demostraron que el proyecto era inviable. Además, los grupos oligárquicos se enfrentaron a la reforma fiscal y llegaron, en el caso de Cataluña, a boicotear los impuestos.

En marzo de 1901 Sagasta volvía a formar gobierno. En mayo de 1902 Alfonso XIII era proclamado Rey, al cumplir la mayoría de edad, comenzando su reinado. Un año más tarde, ya retirado del gobierno, moría Sagasta. Con la muerte del viejo líder liberal, el inicio del nuevo reinado, y las consecuencias del *desastre*, termina el primer periodo del régimen de la Restauración.